



# Salir de la crisis a través de la sostenibilidad ambiental

Febrero 2012

Propuestas de Greenpeace para las  
Elecciones Autonómicas en Andalucía

GREENPEACE

[greenpeace.es](http://greenpeace.es)

## Salir de la crisis a través de la sostenibilidad ambiental febrero 2012

### Introducción

4 Publicado por

### Propuestas de Greenpeace para salir de la crisis

6 **Greenpeace España**

1. Impulsar un modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

San Bernardo 107 1ª planta

Tel: +31 91 444 14 00

Fax: +31 91 475 42 12

**greenpeace.es**

2. Ordenar el litoral y proteger los ecosistemas costeros

**El informe se puede encontrar en**

[www.greenpeace.es](http://www.greenpeace.es)

3. Defender la pesca artesanal y el uso sostenible de los recursos pesqueros

4. Apuesta decidida por una agricultura sostenible libre de transgénicos

5. Revitalizar el sector forestal y retiro de las plantaciones de eucaliptos de ENPs

6. Mejora de la calidad ambiental y protección de la salud pública reduciendo la contaminación industrial

7. Apuesta por un modelo de gestión de los residuos basado en el reciclaje y sin incineración

8. Participación, gobernanza y diálogo social





## Introducción

El próximo 25 de marzo los andaluces tienen que decidir quiénes van a liderar el rumbo de su comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. En un contexto de crisis económica y altas tasas de desempleo se corre el peligro de que el discurso político se centre únicamente en la reducción del déficit, los recortes en sectores básicos para la sociedad y cambios legislativos que den lugar a una mayor permisividad con algunas actividades económicas.

En este documento, elaborado específicamente para las próximas elecciones andaluzas, Greenpeace quiere aportar su visión y sus propuestas **para salir de la crisis económica sin abandonar la senda de la sostenibilidad y la mejora ambiental**. Una senda que no debe conducir a viejos errores, como la apuesta por un modelo de crecimiento basado en el sector del ladrillo, devorador del territorio y responsable de la crisis actual.

Para Greenpeace, la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, la agricultura de calidad, la correcta gestión de los recursos naturales y el apoyo decidido al sector forestal y a la pesca artesanal forman parte de la solución. Asimismo, para la organización ecologista la salida pasa por el desarrollo de sistemas de gestión de residuos modernos y sostenibles, la implantación de servicios de transporte eficientes e inteligentes, la defensa de la calidad del aire y de la salud de los ciudadanos y el abandono de proyectos agresivos con el medio ambiente.

Además de tener un enorme potencial como generadores de empleo, la apuesta por estos sectores supondrá un avance decisivo hacia una economía baja en carbono y hacia el mantenimiento de los servicios ecosistémicos básicos.

El 25 de marzo los andaluces no solo deben decidir qué estilo de gobierno desean. También han de elegir las soluciones que quieren para avanzar hacia otro modelo más diversificado, que defienda los sectores en los que Andalucía es ya un líder en Europa, basados en el enorme potencial de la calidad ambiental de su territorio.

Esta elección permitirá el cambio hacia un modelo compatible con la capacidad del territorio y coherente con los compromisos que nuestro país ha adquirido en la escena internacional y con los avances legislativos en la protección del territorio y el derecho a un medio ambiente saludable.

Por último, Greenpeace considera que la acción política del Gobierno andaluz debe adoptar principios, actitudes y actuaciones que impliquen más a la ciudadanía en los acontecimientos sociales y pongan fin a los problemas de legitimidad democrática a los que se enfrentan en la actualidad los gobiernos. Fortalecer la participación y la democracia inyectará oxígeno en la vida pública y ayudará a recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política.

### **Sin medio ambiente no hay salida a la crisis**

Los futuros responsables del gobierno de la Junta de Andalucía deberán tener en cuenta los vínculos existentes entre la calidad del medio ambiente

y el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Los ecosistemas bien conservados y la biodiversidad no solo proveen bienes y servicios ambientales básicos. Una mayor comprensión de los beneficios que brindan los ecosistemas debería traducirse en un mayor apoyo político a la conservación del litoral, a la red de Espacios Naturales Protegidos y a la calidad del medio ambiente urbano. Esto se conseguiría mediante la búsqueda de objetivos comunes, también con las políticas de otros departamentos encargados de la industria, infraestructuras, gestión de residuos, transporte, energía, etc.

Desde numerosos ámbitos empresariales, sindicales y universitarios se ha remarcado en los últimos años el papel del medio ambiente en la creación de empleo, ya sea directamente en el sector primario (pesquero, forestal y energético renovable), o indirectamente mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, dando apoyo a la industria del turismo, o a través de la gestión de los espacios protegidos, los usos recreativos en el medio natural, etc. Aunque resulte complicado poner valor a los servicios de los ecosistemas, es importante señalar la relevancia de servicios tales como el suministro de agua, la captura de carbono o la prevención de desastres naturales.

Además de exponer las claras oportunidades de la comunidad andaluza para salir de la crisis, Greenpeace debe mencionar también las amenazas, como el cambio climático. Los expertos señalan que España es ya uno de los países más afectados de Europa por el calentamiento: mientras que el promedio de aumento de temperatura del continente ronda los 0,9°C, en España se alcanza el 1,5°C.

La región mediterránea, y con ella Andalucía, es uno de los escenarios donde los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas vaticinan un mayor impacto. La escasez de recursos hídricos y la elevación de la temperatura son un binomio muy peligroso para sectores como la agricultura y la gestión forestal. El incremento de la temperatura media del mar está impactando ya sobre los recursos pesqueros y el aumento del nivel del mar pone en riesgo la biodiversidad de los humedales y zonas bajas costeras como el Parque de Doñana. Estos cambios afectan también a uno de los sectores económicos clave en Andalucía, el turismo de costa; el turismo interior se verá por su parte gravemente perjudicado por el crecimiento de las olas de calor.

Las previsiones que maneja el propio Gobierno andaluz apuntan a un crecimiento de las temperaturas máximas en Andalucía de hasta 5,4 grados cuando finalice el siglo; las precipitaciones disminuirían alrededor del 7%. Estas magnitudes implican no solo un importante daño ambiental, sino también severas repercusiones económicas y sociales.

Otra de las salidas equivocadas a la crisis sería ahondar en los problemas ambientales que acechan a esta comunidad autónoma. Andalucía acumula algunos de los casos más graves de agresión al medio ambiente, así como problemas de salud pública asociados a la contaminación y la complicidad de las administraciones públicas con infractores. En las

pasadas legislaturas, la Junta de Andalucía ha dado su apoyo a proyectos urbanísticos y empresariales y ha ocultado o minusvalorado su impacto ambiental, social y sanitario. Asimismo, ha descalificado frecuentemente a los grupos ecologistas críticos y ha sido permisiva con los transgresores de la ley, cuando no ha sido la misma Administración la infractora.

Es fundamental un cambio de actitud por parte de la Junta de Andalucía, una transformación que dé paso a una mayor participación pública en la toma de decisiones y más transparencia y acceso a la información como elementos indispensables para generar confianza.

Salir de la crisis exige mantener y mejorar la calidad del medio ambiente. Greenpeace expone en este documento medidas concretas sobre los sectores y asuntos más relevantes con la intención de que sean tenidas en cuenta durante el debate previo a las elecciones y los diferentes partidos las incluyan en sus programas. Y avancemos así hacia una economía verde.

## Propuestas de Greenpeace para salir de la crisis

### 1. Impulsar un modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Andalucía es una región líder en energías renovables dentro de la Unión Europea. A mediados de 2011 superaba los 4.370 megavatios de potencia eléctrica renovable, según datos del Observatorio de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN). Además, las energías limpias generan en la región cerca de 10.000 empleos directos.

Andalucía posee recursos naturales y tecnología para cubrir todas sus necesidades de energía con renovables. Según evaluó Greenpeace en su informe Renovables 2050, la comunidad autónoma podría generar en 2050 energía limpia suficiente para satisfacer 65 veces su demanda de electricidad y 10 veces su demanda energética total.

El liderazgo andaluz en renovables se fundamenta en la I+D impulsada por las universidades y desarrollada en un centro de primera línea mundial como la Plataforma Solar de Almería, recientemente complementada por el CTAER (Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables), puesto en marcha por la Junta a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Empresas de la región compiten en los mercados internacionales de las energías limpias, al mismo tiempo que compañías extranjeras desarrollan en Andalucía su tecnología, producen equipos y/o generan energía termosolar, fotovoltaica, eólica y biomasa agrícola y forestal.

El enorme potencial del sector de las energías renovables en Andalucía, con las ventajas ambientales y macroeconómicas que estas comportan (en especial por contribuir a la reducción de nuestra gran dependencia energética del exterior, y por su capacidad de generación de empleo), hace indispensable que el nuevo Gobierno andaluz apueste de forma decidida por ellas y por la eficiencia energética.

El desarrollo tecnológico y la generación de empleo en Andalucía no son las únicas razones para apostar por un modelo 100% renovable. Esta región puede ser también un ejemplo en la lucha contra el cambio climático. Como demuestran los informes científicos, si no lo frenamos la comunidad autónoma se vería gravemente afectada, con una mayor frecuencia de extremos climáticos más intensos (olas de calor, sequías); reducción de recursos hídricos; y aumento de los índices de riesgo de incendios forestales, entre otros problemas. Estos cambios ponen en riesgo sectores clave en la región como la agricultura, la pesca o el turismo.

A estos peligros se añaden los derivados de los proyectos de nuevos pozos de hidrocarburos en diversas fases de desarrollo en la costa Andaluza. La causa de estas prospecciones es la elevada dependencia energética de España. Sin embargo Andalucía, gracias a su potencial en renovables y eficiencia energética (especialmente en el sector del transporte, responsable del consumo de un 70% del petróleo), tiene una

receta óptima para reducir la subordinación energética. Una opción libre del impacto ambiental sobre espacios naturales de primera importancia y de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de repercusiones negativas sobre otros sectores económicos como la pesca y el turismo.

Andalucía dispone de más de doscientas grandes instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero (centrales térmicas, refinerías, cementeras...). Por motivos ambientales, pero también por su creciente traducción en impactos económicos, es indispensable que la región, como las demás comunidades autónomas, adopten una posición proactiva en la lucha contra el cambio climático y adopten una política que nos conduzca a un modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Las inversiones que se realicen en estos próximos años condicionarán la posibilidad de desarrollar esa transformación a tiempo.

#### **Demandas a los partidos políticos:**

- Adoptar una política activa de apoyo a la instalación de nueva potencia renovable; garantizar que Andalucía mantenga su posición de liderazgo en tecnologías limpias como la solar termoeléctrica.
- Mantener la financiación en I+D en energías renovables y eficiencia energética.
- Oponerse claramente a la moratoria a las renovables impuesta por el Gobierno central y a cualquier otro intento de regresión a una política energética no sostenible.
- Impulsar el desarrollo de redes inteligentes y el autoconsumo de energía limpia.
- Oponerse a los proyectos de nuevos pozos de hidrocarburos en la costa andaluza y asegurar una moratoria de estos proyectos en aguas de la comunidad.
- Adoptar una política activa de apoyo al transporte colectivo en detrimento del uso del coche; establecer mecanismos de promoción de sistemas alternativos de transporte eficiente e inteligente en aquellas áreas en las que el transporte colectivo no tenga suficiente demanda, como el car-sharing, el car-pooling o el transporte colectivo a demanda.
- Adoptar criterios mínimos de eficiencia energética en las políticas de compra de las flotas de vehículos de las administraciones andaluzas. Especialmente para los coches: 80gCO<sub>2</sub>/km (3 l/100km).
- Priorizar la inversión (autonómica y/o en cooperación con el Estado) en aquellas infraestructuras capaces de impulsar un transporte eficiente e inteligente, en detrimento de los grandes sistemas lineales de gran capacidad. Ejemplos de estas infraestructuras sostenibles serían los carriles Bus/VAO en los accesos a las grandes ciudades, carriles bici, los segregados para transporte colectivo y la electrificación total de la red

ferroviaria, entre otras.

- Elaborar un nuevo Plan Andaluz de Acción por el Clima 2012-2020, con objetivos más ambiciosos en todos sus apartados que los del Plan 2007-2012. Se apoyaría así una posición favorable de España a una reducción unilateral de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la UE del 30% para el año 2020, con respecto a los niveles de 1990.

## 2. Ordenar el litoral y proteger los ecosistemas costeros

Andalucía tiene en su costa un activo económico inigualable. Aproximadamente el 30% de sus casi 1.000 kilómetros de litoral está considerado Espacio Natural Protegido. Esta costa, junto a otras extensiones vírgenes, es uno de los principales atractivos del sector turístico, baluarte de la pesca costera y de las actividades artesanales asociadas a marismas y esteros. Por este motivo, el litoral debe gestionarse desde enfoques de protección del recurso y con la mirada puesta en los potenciales efectos de la subida del nivel del mar debido al cambio climático.

En las últimas legislaturas, Greenpeace ha expuesto el grave problema de la presión de la industria constructora y turística sobre la costa, en contra de los criterios de la planificación física del territorio e incluso del marco legal vigente. El litoral andaluz lleva sufriendo durante muchos años los efectos del turismo depredador y de los planes urbanísticos de sus localidades. Como indicador, en el último tercio de la legislatura, en 2009, en plena crisis económica se ponía en marcha la Ley 1/2008 de medidas tributarias y financieras, que rebaja las exigencias de siete leyes medioambientales andaluzas y sigue anteponiendo la industria de la construcción sobre otros modelos de desarrollo.

La traducción de estas políticas llegan a un extremo tal que, en febrero de 2010, la Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental anunció el trámite de un decreto que pretende rebajar el nivel de protección de los Espacios Naturales Protegidos e imponer los planes urbanísticos municipales (PGOU) por encima de las normas de protección de estos Espacios Naturales. La falta de planificación del territorio y la apuesta por el urbanismo masivo ha provocado que la Junta de Andalucía apruebe además, en enero de 2012, un decreto que persigue la regularización de miles de edificaciones que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. Este decreto está transmitiendo el peor de los mensajes, que el delito no se persigue y que todo vale en la costa andaluza.

Andalucía acumula algunos de los ejemplos más evidentes de urbanismo salvaje, algo que daña su imagen nacional e internacional. Desde una perspectiva económica, las causas judiciales abiertas por los numerosos casos de corrupción urbanística en la comunidad suponen un importante desembolso para las arcas públicas.

Casos paradigmáticos como los del hotel ilegal de El Algarrobico (Carboneras, Almería) deben servir de ejemplo de lo que no se puede volver a repetir. En este caso concreto, la justicia ya se ha pronunciado; la Junta de Andalucía debe ejemplarizar el cambio de modelo con el derribo inmediato del hotel. Asimismo, debe devolver la ordenación del Parque Natural a zona no urbanizable, tal y como sentenció el Tribunal Supremo en octubre de 2011.

También afectan negativamente a la imagen de Andalucía los nuevos proyectos urbanísticos que aún planean sobre el escaso territorio costero virgen de la comunidad.

El polígono industrial en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz), también declarado ilegal por el Supremo, invade una zona anegable de marismas con un importante valor ecológico. Por este motivo, Greenpeace propone desestimar este proyecto y buscar una alternativa en el importante tejido de suelo industrial que ya existe en el entorno de la bahía de Cádiz.

Otro ejemplo sobre la necesidad del cambio a otro modelo, donde prime la economía local frente a la elevada temporalidad de los complejos turísticos del “todo incluido”, se refleja sin duda en todo el entorno de cabo Trafalgar. En este tramo de la costa se debe apostar por desterrar el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Un macropuerto en esta localidad terminaría con su turismo activo; la construcción de más de 600 camas? en El Palmar supondría asfixiar cualquier apuesta por un desarrollo sostenible y ordenado, que ya está consolidado en la región.

### **Demandas a los partidos políticos:**

- Demolición de El Algarrobico y restauración del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata.
- Moratoria urbanística en Espacios Naturales Protegidos: abandono del proyecto de ampliación del Puerto de Tarifa; renuncia al uso de las marismas de Las Aletas como suelo industrial y del proyecto macroturístico en El Palmar, aplicando una Gestión Integrada de Zonas Costeras que apueste por el urbanismo local y sostenible.
- Estricto control del crecimiento urbanístico y aplicación rigurosa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); derogación de normativas como el Decreto de Regularización de Viviendas Ilegales en Suelo No Urbanizable.

## Propuestas de Greenpeace para salir de la crisis

### 3. Defender la pesca artesanal y el uso sostenible de los recursos pesqueros

El sector de la pesca y el marisqueo en Andalucía constituye otro de los principales pilares de la economía. La pesca artesanal tiene una especial importancia: genera de forma directa más del 50% de los puestos de trabajo a bordo.

Localizada en los 25 municipios pesqueros, la pesca artesanal representa el 64,04% del sector en Andalucía y produce unas capturas de solo el 8,2%. En términos de valor comercializado estas capturas representan casi el 20% de todo el valor agregado regional.

La flota pesquera andaluza está formada por 1.778 embarcaciones, 804 de las cuales operan en el golfo de Cádiz y 901 en el Mediterráneo; otras 73 unidades faenan en caladeros de terceros países, fundamentalmente en el litoral africano.

El próximo Gobierno andaluz debe ser portavoz y apoyo de un modelo de aprovechamiento de los recursos marinos que dé preferencia a la pesca sostenible, a las artes selectivas y al sector artesanal, donde se concentra mayormente el empleo. No debe favorecer los intereses de una industria pesquera altamente destructiva, como son algunas actividades de la flota de arrastre (322 barcos, el 18% de la flota) o la flota que opera en caladeros de terceros países.

Europa debate en la actualidad la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). Esta legislación establecerá nuevas normas para la flota de cada comunidad autónoma, país, y en definitiva de la Unión Europea (UE). La Junta de Andalucía, en sus propuestas al Libro Verde para la Reforma de la PPC planteó una serie de principios para definir el nuevo marco normativo comunitario. Con ello quería asegurar una pesca sostenible tanto desde el punto de vista de la conservación de los recursos como de la rentabilidad económica de la actividad pesquera para las empresas, trabajadores y familias.

La nueva PPC debe definir y fomentar la pesca artesanal e incluir términos que la diferencien, como la sostenibilidad de las artes y el entramado socioeconómico que genera. Esta apuesta por la gestión sostenible de los recursos pesqueros empieza por eliminar la sobrecapacidad. Para ello se ha de ajustar la flota pesquera a unos objetivos sostenibles y eliminar las artes de pesca destructivos y/o poco selectivos. Esto sería posible si hay una mejora de las técnicas pesqueras para recuperar los stocks y asegurar el futuro de la actividad pesquera, promoviendo e incentivando las técnicas de pesca sostenibles y de bajo impacto.

La reforma de la PPC tendrá un impacto en las pesquerías de todo el mundo durante los próximos diez años. Puede ser esta, por tanto, la última oportunidad para garantizar el futuro y la sostenibilidad de los mares y de quienes dependen de sus recursos. Un apoyo a la protección del medio marino a través de la defensa de la pesca artesanal y el marisqueo, la gestión común de los recursos y la creación de Reservas Marinas es esencial para que se asegure el futuro de la pesca y de los pescadores.

Nuestros mares muestran señales de agotamiento. Tres de cada cuatro pesquerías europeas están sobreexplotadas. Es necesario que se respeten las recomendaciones científicas en el establecimiento de cuotas y que estas acaten el rendimiento máximo sostenible para 2015. Por todo ello hay que asegurar la transparencia en la asignación de subvenciones y evitar así su empleo en la financiación de la destrucción de los océanos y en la pesca ilegal.

#### **Demandas a los partidos políticos:**

- La Junta de Andalucía debe apostar por la mejora de la gestión de los recursos pesqueros y luchar contra la sobreexplotación y la pesca ilegal en los caladeros nacionales e internacionales.
- La Junta de Andalucía debe actuar asimismo como portavoz de los intereses de la flota artesanal, poniendo más atención en los procesos de negociación de la nueva Política Pesquera Común.

### 4. Apuesta decidida por una agricultura sostenible libre de transgénicos

La relevancia de la agricultura ecológica en Andalucía, con el 60% de toda la producción nacional, hace de este un sector clave para el futuro de la región. Esta agricultura basada en el respeto al suelo y la biodiversidad, está siendo motor económico generador de empleo y sus beneficios al medio ambiente son evidentes. Pero además, la agricultura ecológica andaluza tiene acceso a unos mercados europeos cada vez más exigentes y más recelosos de los impactos de la agricultura intensiva y de los efectos sobre la salud de los agroquímicos y fitosanitarios.

La agricultura ecológica tiene un gran potencial de crecimiento; esto permite al sector agrícola un buen horizonte de futuro en un contexto económico difícil. Sin embargo, está profundamente amenazado por la expansión y contaminación producida por los cultivos transgénicos. En otras comunidades autónomas, donde el maíz transgénico se ha extendido, algunos agricultores se han visto obligados a abandonar el cultivo del ecológico debido a la contaminación producida por el maíz transgénico. Si bien en Andalucía la implantación de este maíz es aún muy reducida (cerca de 5.000 hectáreas en 2011), supone una seria amenaza. Dada la escasa superficie, revertir esta situación es muy fácil.

Además, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que establece la no autorización a la presencia de polen procedente de cultivos transgénicos en la miel ni en complementos alimenticios, podría hacer inviable toda la producción de los apicultores andaluces, en el caso de que se produzca contaminación por la presencia de cultivos transgénicos, sean comerciales o experimentales.

Andalucía es también la única comunidad autónoma en España donde se produce algodón. En caso de que se autorice y cultive el transgénico en Andalucía, para lo que recientemente se solicitó autorización en la UE, la decisión minaría el potencial de crecimiento del cultivo de algodón ecológico, cada vez más demandado en todo el mundo.

Una apuesta por la investigación en agroecología y la inversión y desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas permitirían a España ser el máximo exponente en este sector. Al contrario, la opción por una agricultura intensiva basada en los cultivos transgénicos provocaría el rechazo no solo de la sociedad española, sino también de los mercados europeos importadores de productos andaluces cuya imagen de calidad se vería dañada.

#### **Demandas a los partidos políticos:**

- Apoyo decisivo a producción ecológica, fomentando el consumo interno tanto en el sector público (enseñanza, hospitales, ayuntamientos, etc.) como en el sector privado.
- Prohibición de los cultivos transgénicos, comerciales y experimentales, al aire libre, en toda Andalucía.
- Desarrollar las medidas necesarias que garanticen la trazabilidad y el etiquetado de los productos que contengan transgénicos.
- Creación de un registro público andaluz con la localización exacta de las parcelas cultivadas con transgénicos.
- Establecimiento de un régimen de responsabilidad estricta acorde con el principio "quien contamina paga".

## **5. Revitalizar el sector forestal y retiro de las plantaciones de eucaliptos de ENPs**

Los terrenos forestales y el monte andaluz ocupan alrededor del 52,6% del espacio de la comunidad. A su relevancia territorial hay que sumar su integración en el contexto económico y social de la región; constituyen un elemento vital de cohesión y equilibrio territorial. Dentro de esta superficie forestal formada por 4,6 millones de hectáreas, algo más de la mitad corresponde a terrenos arbolados en zonas rurales tradicionalmente con rentas bajas y con una baja densidad de población.

Hace casi una década, la Junta de Andalucía realizó la 1ª Valoración Económica Integral de los Ecosistemas Forestales en Andalucía. En este estudio se concluía que el 25,3% de todo el valor del monte andaluz era de carácter productivo, el 15,2% correspondía a los aspectos recreativos y casi el 60% del valor restante se atribuía a los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas.

El análisis no hacía más que remarcar un aspecto fundamental del monte mediterráneo andaluz: su carácter multifuncional. El monte, además de proveer bienes, es un complemento a las rentas agrícolas y ayuda a mantener población en zonas desfavorecidas y aporta grandes beneficios ambientales que redundan en un incremento del bienestar de la sociedad en su conjunto. Pero el cambio climático, que agudiza algunos problemas sanitarios del monte mediterráneo y hace más virulentos los incendios forestales, supone ya una amenaza evidente para el monte andaluz.

El carácter multifuncional del monte y el hecho de que sostenga una parte de la actividad económica y del empleo en el medio rural otorga también al sector forestal un carácter estratégico.

Andalucía ya ha sido pionera dentro del panorama nacional a la hora de buscar amplios consensos para enfrentarse a iniciativas de tipo ambiental. A finales de los años ochenta fue el movimiento ecologista el que propuso un ambicioso Pacto Forestal Andaluz, que permitiera una transición ordenada del inadecuado modelo con el que se estaban gestionando los bosques de la región a fórmulas más respetuosas con estos ecosistemas. El documento, al que se sumaron numerosos colectivos, terminó inspirando, ya en el ámbito parlamentario, el actual Plan Forestal Andaluz.

La posibilidad de revitalizar un acuerdo similar tiene grandes visos de éxito. En el ámbito nacional, en mayo de 2011 el pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al gobierno a impulsar el sector forestal como escenario estratégico, un yacimiento de empleo verde, un sector vital para el Desarrollo Rural. También se le señalaba la necesidad de potenciar la utilización racional de productos forestales, de fomentar una contratación pública que priorice los productos renovables y sobre la exigencia de la certificación forestal...

No solo los partidos políticos están de acuerdo, los movimientos ecologistas hemos aplaudido este tipo de iniciativas y estaríamos dispuestos a sumar apoyos para conseguir que los montes andaluces sirvan para generar empleo al mismo tiempo que se conserva la biodiversidad, se gestiona el paisaje y se mantiene la red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Sería muy importante para ello rebajar la conflictividad existente en algunos espacios protegidos debido a actuaciones forestales en fincas públicas y privadas. Es necesario el cumplimiento de los compromisos de la Junta de Andalucía en materia de permutas de fincas y permitir la retirada progresiva de las plantaciones de eucaliptos en el interior de los espacios protegidos.

#### **Demandas a los partidos políticos:**

- Hacer del sector forestal andaluz un sector estratégico, con la elaboración de una estrategia consensuada con los actores económicos y sociales interesados en el uso sostenible del monte mediterráneo andaluz.
- Incrementar la superficie de bosques con planes de gestión forestal y

## Propuestas de Greenpeace para salir de la crisis

con certificado forestal de FSC, como forma de mejorar el acceso de sus productos a los mercados.

- Reducción progresiva de la superficie de plantaciones de eucalipto en los Espacios Naturales Protegidos, cumpliendo el compromiso de la Junta de Andalucía de realizar permutas de fincas fuera de estos espacios.
- Fomento ordenado del uso energético de la biomasa forestal.
- Apoyo a la compra pública que priorice la adquisición de productos forestales con certificación forestal FSC.
- No bajar la guardia con el problema de los incendios forestales; mantener el operativo de prevención y lucha contra incendios.

## 6. Mejora de la calidad ambiental y protección de la salud pública reduciendo la contaminación industrial

Diversas publicaciones científicas, estudios epidemiológicos y atlas de mortalidad ponen de manifiesto que los peores indicadores de salud se acumulan en el suroeste español.

El Instituto de Salud Carlos III concluye que el triángulo Cádiz, Sevilla, Huelva presenta los índices más altos de mortalidad por patologías tumorales de España; la Universidad Pompeu Fabra ha encontrado por su parte que existen áreas concretas donde la esperanza de vida es de 20 años menos que en algunas comarcas del norte del Estado español. Esta mortalidad prematura, según los estudios, no es atribuible al azar: la zona es la más industrializada de Andalucía, de las más contaminadas de España y también de las que acumulan un mayor desempleo.

Ante esta situación de crisis de salud pública crónica es urgente llevar a cabo un análisis que determine la responsabilidad del sector industrial en el problema, petición que ha sido demandada también desde diferentes instancias del ámbito científico.

Además de estos estudios, es necesario aplicar de manera responsable el principio de precaución: no se deben conceder nuevas autorizaciones para instalaciones de industria pesada en zonas sobre las que ya existe una presión industrial que afecta de manera grave a la calidad ambiental y la salud pública. Un cambio de rumbo hacia la protección de la salud pública y el desarrollo sostenible implica mayores exigencias a las empresas; también acabar con el “cheque en blanco” concedido a las compañías más contaminantes bajo la excusa de la generación de empleo.

Andalucía acumula claros ejemplos donde hay que llevar a cabo estas reformas. Entre ellos se halla Campo de Gibraltar, con un nuevo desarrollo de industria pesada que obvia las repercusiones sanitarias en una de las

zonas ya más industrializadas de Andalucía y con uno de los peores ratios de salud. Las balsas de fosfoyesos de Fertiberia, un vertedero de 1.200 hectáreas que acumula 120 millones de toneladas de residuos peligrosos, tienen que recibir un tratamiento adecuado y no ocultar el problema. Esto solo revertería en una herencia tóxica para el futuro.

El caso de Befesa (Abengoa) y una explotación del vertedero de Nerva se caracterizan por una gestión irregular; se necesita un control férreo de las administraciones hasta su cierre, cuando expire la autorización del proyecto inicial.

### Demandas a los partidos políticos:

- Elaborar nuevos estudios epidemiológicos que establezcan el impacto de la contaminación industrial sobre la salud pública y que permitan llevar a cabo un Plan Integral de Salud Pública que incluya la componente ambiental.
- Aplicación del principio de precaución y moratoria a la industria pesada en aquellas zonas con peores índices de salud y calidad ambiental.
- Control férreo a las empresas en el cumplimiento de la legislación ambiental y de recuperación del entorno.

## 7. Apuesta por un modelo de gestión de los residuos basado en el reciclaje y sin incineración

Los residuos son recursos naturales que deben ser aprovechados para evitar problemas ambientales y de salud pública. Su gestión y reciclaje es también un yacimiento de empleo.

El incesante crecimiento en la generación de residuos y su pésima gestión se ha convertido en un problema de primer orden. Administraciones públicas y gestores privados han considerado estos residuos como desechos que hay que hacer desaparecer y han optado por su incineración o depósito en vertederos.

Para poder afrontar el reto de la gestión de los residuos es necesario asumir el objetivo dirigido a políticas de Residuo Cero. Alcanzar esta meta es rentable económica, social y ambientalmente y solo se necesita voluntad política.

Se deben de empezar a implantar medidas efectivas para disminuir la generación de basuras, aumentar los porcentajes de reutilización (actualmente es anecdótica) y reciclado de residuos de calidad. El

objetivo es disminuir el depósito en vertedero y eliminar la incineración completamente (sea con o sin recuperación energética).

En este sentido es necesario que Andalucía apoye y exija al gobierno central el desarrollo estatal de iniciativas como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR). También la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia y obtener así un fertilizante de valor comercial.

#### **Demandas a los partidos políticos:**

- Implementar de forma obligatoria la recogida selectiva de la materia orgánica y prohibir su vertido.
- Fomentar los sistemas de recogida Puerta a Puerta (PaP), solo así se pueden obtener materiales de calidad y altas tasas de recuperación material.
- Apostar por los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) que implican de una forma mucho más activa a la ciudadanía en la gestión de los residuos.
- Descartar de la gestión de los residuos la valorización energética (incineración, arco de plasma, pirólisis...) así como el vertido masivo en basurero, al tratarse todos ellos de métodos finalistas de eliminación.
- Potenciar la recuperación material y el reciclaje ya que son una fuente indiscutible de empleo verde.

## 8. Participación, gobernanza y diálogo social

Por último, es imprescindible que el próximo gobierno de la Junta de Andalucía incorpore una serie de acciones sin las cuales no es posible que una sociedad avance hacia un modelo económico sostenible.

La acción política del Gobierno andaluz debe adoptar principios, actitudes, conductas y actuaciones que busquen implicar más a los ciudadanos en los acontecimientos sociales y poner término a los problemas de legitimidad democrática a los que se enfrentan en la actualidad los gobiernos. Greenpeace propone una evolución desde el modelo de "gobierno" al de "gobernanza", como mejor antídoto contra la corrupción y el desprestigio de la clase política.

Esta nueva forma de hacer política, indispensable para la generación de confianza y creación de consensos, integra la participación pública en la toma de decisiones y la transparencia y acceso a la información. Para avanzar hacia este modelo es indispensable que las administraciones públicas sean ejemplo en el respeto a las decisiones judiciales, la

supremacía de la ley o la asunción de responsabilidades y rendición de cuentas. Por último, la buena gobernanza solo se produce en un contexto de democracia que asegure la libertad de expresión sin ningún tipo de intervención política y que garantice que las empresas privadas respetan también la libertad de prensa de los medios de comunicación.

Como hemos explicado en este documento, Andalucía es el escenario de algunos de los casos más graves de agresión al medio ambiente y de complicidad de las administraciones públicas con los infractores. Al mismo tiempo que la Junta de Andalucía eludía facilitar información o reunirse con los ecologistas, ha realizado campañas de publicidad y divulgación de los valores ambientales que resultan contradictorias con las políticas y medidas tomadas en numerosos conflictos ambientales.

Es muy importante que el próximo Gobierno andaluz asuma el compromiso con este modelo de gobernanza; que propicie que las diferentes administraciones incorporen mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones; y fomente el diálogo y la búsqueda de soluciones que cumplan, al menos, con el marco legal vigente.

En cuanto a la transparencia, es imprescindible que la Junta de Andalucía no obstaculice el derecho al acceso a la información del ciudadano, según el Convenio de Aarhus, que entró en vigor en España en 2005.



Greenpeace es una organización global independiente que realiza campañas para cambiar actitudes y conductas, para proteger y conservar el medioambiente y promover la paz.

Greenpeace España,  
San Bernardo, 107 1ª planta 28015 Madrid  
Para más información: [info@greenpeace.es](mailto:info@greenpeace.es)